

La acción social en Bolivia: la configuración de una nueva matriz plurinacional indígena.

Grenoville Andrés.

Cita:

Grenoville Andrés (2010). *La acción social en Bolivia: la configuración de una nueva matriz plurinacional indígena*. V Congreso Latinoamericano de Ciencia Política. Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, Buenos Aires.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-036/771>

Título de la ponencia: “La acción social en Bolivia: la configuración de una nueva matriz plurinacional indígena”

Autor: Andrés Grenoville

Email: agrenoville@gmail.com

Institución: UBA-IIGG-CONICET

Área temática: Política comparada

Subárea temática: Procesos políticos en América Latina

“Trabajo preparado para su presentación en el V Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP). Buenos Aires, 28 a 30 de julio de 2010.”

Resumen:

El trabajo analiza los cambios en la acción social en Bolivia a partir de las transformaciones operadas en la matriz sociopolítica. De este modo, la ponencia consta de una primera parte en la cual se explicita el marco teórico utilizado, y una segunda parte en la que se identifican los elementos teóricos anteriormente expuestos partir del análisis de caso. En este sentido, se propone un análisis histórico que dé cuenta de las configuraciones que asume la política, la cultura, la sociedad y la economía en cada una de las etapas.

La acción social en Bolivia: la configuración de una nueva matriz plurinacional indígena

1. Introducción

El triunfo de Evo Morales en las elecciones presidenciales de 2005 implican la puesta en marcha de un nuevo proyecto modernizador caracterizado por una articulación híbrida entre componentes tradicionales y modernos: el indigenismo y el nacionalismo. A su vez, trae aparejado importantes consecuencias para el sistema democrático actual. Por un lado, pone fin a veinte años de “democracia pactada” entre los partidos tradicionales y significa el retorno de una opción de izquierda al gobierno. Por otro lado, inaugura un proceso de profundas transformaciones para la mayoría indígena de la población. La reforma constitucional aprobada ampliamente a través de un referéndum promete resolver en buena medida los clivajes regionales y étnicos-culturales. En la misma se reconocen los derechos colectivos a los pueblos originarios y las autonomías regionales, departamentales, municipales e indígenas impulsadas por medio de un proceso de descentralización política.

En el presente trabajo me propongo abordar los cambios en la acción colectiva que permitieron que un partido compuesto por movimientos sociales y campesinos se convirtiera en una fuerza dominante del sistema partidario boliviano. En la primera parte, expondré los elementos teóricos que componen la matriz sociopolítica clásica y los factores que llevaron a su desarticulación. En la segunda parte, examinaré el caso de Bolivia a partir de un análisis histórico. De este modo, pretendo exponer cómo se constituyeron los principales movimientos sociales, de qué modo se vincularon con el Estado y qué factores fueron llevando a su transformación.

2. Elementos teóricos que permiten definir la matriz sociopolítica

El concepto de matriz sociopolítica remite a las relaciones particulares que se establecen, en una sociedad histórica determinada, entre el Estado, la estructura política partidaria y la sociedad civil. La configuración que asumen estas relaciones determina, aunque no linealmente, la constitución de actores - sujetos, los patrones en los que éstos interactuarán y, a su vez, las características a partir de las cuales se manifestará la acción social.

Ahora bien, el Estado puede ser definido a partir de las múltiples dimensiones que lo componen o, también, según las funciones que ha ido asumiendo en diferentes momentos históricos. Weber define al Estado como “un instituto político de actividad continuada, cuando y en la medida en que su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente” (Weber, 1981: p. 43-44). A su vez, Ozslak, precisando aún más el concepto, sostiene que además del monopolio legítimo de la violencia, los Estados deben ser reconocidos como soberanos por otros, diferenciar su control a partir de un conjunto de instituciones funcionalmente diferenciadas y, por último, deben ser capaces de crear una identidad colectiva a través de símbolos que generen pertenencia y solidaridad social. Sin embargo, además de las funciones tradicionales de tutela de la soberanía y mantenimiento del orden a través del

monopolio legítimo de la violencia y el poder de coacción, el Estado puede ser analizado a partir de otras múltiples dimensiones. Garretón sostiene que el Estado cristaliza relaciones de dominación pero, a su vez, es un “(...) actor relativamente autónomo, agente de desarrollo, integración y redistribución” (Garretón y Espinoza, 1992: pp. 139-140).

La relación privilegiada que se establece entre el Estado y la sociedad es la política. En este sentido, el régimen político es el conjunto de instituciones que median y representan a la ciudadanía. Estarán encargadas de formar el gobierno, de procesar los conflictos y dar respuestas a los problemas de la ciudadanía. Las características que asuma la acción social dependerán, por un lado, del modo en que se vinculen las dimensiones que la componen. A saber: los comportamientos individuales y colectivos, las organizaciones e instituciones que disponen, y los proyectos y contra-proyectos que le dan sentido a la acción colectiva. Esta última dimensión se forja en el terreno de la historicidad, determinada histórica y estructuralmente. Es la que permitirá que los movimientos sociales, además de sus reivindicaciones concretas, puedan definir la acción colectiva en torno a un conflicto central que atraviesa a gran parte de la sociedad y emprender acciones que estén dirigidas a lograr un cambio del orden social.

Por otra parte, el modo en que se configuren los actores sociales también dependerá de los ámbitos de acción. Ellos se componen principalmente de la economía, la política y la cultura. Es decir, cómo satisface la sociedad sus necesidades materiales, cómo se encuentran configuradas las relaciones de poder, el modo en que se encuentra compuesto el entramado organizacional de la sociedad civil y, por último, a los modelos éticos, la representación simbólica y la socialización que en un contexto dado caracterizarán a las interrelaciones que surjan en la sociedad.

3. De la matriz nacional popular a su desarticulación

La matriz nacional popular, clásica o estado-céntrica que predominó en América Latina entre 1930 y 1970, aunque con diferencias entre países, se caracterizó por un modelo de desarrollo económico “hacia adentro”, modernización, integración social y autonomía nacional. Estas cuatro dimensiones atravesarían a la sociedad y acabarían por configurar un tipo particular de acción colectiva. Se trata de imponer un proyecto en contraposición a los sectores liberales del bloque de poder oligárquico para los cuales el modelo de desarrollo económico se caracterizaba por una economía abierta que beneficiara al modelo exportador de materias primas.

Los principales aspectos económicos de la matriz fueron “la industrialización sustitutiva [dirigida por el Estado], la economía cerrada o semicerrada, la regulación estatal de los mercados y el patrón de inflación <moderada>” (Cavarozzi, 1991: pp. 94). Desde el ámbito cultural se buscó generar un proyecto nacional de base popular en el cual el obrero era el sujeto histórico predominante, quien encarnaba el ideario de *pueblo*, y sus luchas tenían un sentido revolucionario de cambio del orden social. En este sentido, desde el bloque de poder no se apela únicamente al *pueblo* sino que, a su vez, el discurso también posee un componente ideológico. Siguiendo a Laclau, el populismo que funcionó en varios

países de América Latina consistió en “reunir el conjunto de las interpelaciones que expresaban la oposición al bloque de poder oligárquico –democracia, industrialismo, nacionalismo, antiimperialismo–, condensarlas en un nuevo sujeto histórico y desarrollar su potencial antagonismo enfrentándolo con el punto mismo en el que el discurso oligárquico encontraba su principio de articulación: el liberalismo” (Laclau, 1986: 221). En este sentido, la política era la acción privilegiada de toda la acción colectiva y se caracterizaba por ser más movilizadora que representativa. Las asincronías de América Latina y la debilidad de su modelo de desarrollo producen “(...) la imposibilidad de una *movilización* que se verifique a través de la *integración*. En consecuencia, la movilización se verifica a través de formas aberrantes y antiinstitucionales, que constituyen la matriz de donde emergen los movimientos nacionales-populares”. (Laclau, 1986: 173). Por consiguiente, el sistema de representación, el conjunto de instituciones que median entre la sociedad civil y el Estado, fue el componente más débil de la matriz.

La matriz sociopolítica clásica se caracterizó por la ausencia de autonomía de los componentes que la integraban. Estado y sociedad se encontraban interpenetrados de modo que ambos carecían de autonomía. Los ámbitos de la acción social (economía, política, cultura y sociedad) se encontraban fusionados produciendo que el conflicto social se polarizara en dos clivajes antagónicos. Ser *obrero* significaba, además, ser antiimperialista, antioligárquico, nacionalista y defensor de la soberanía nacional. De este modo, se constituye el Movimiento Nacional Popular en el cual la clase obrera es su actor principal y quien define el principal conflicto de la sociedad. Política y trabajo fueron los ejes a través de los cuales se orientó la acción colectiva y estaba destinada a reforzar el Estado benefactor y el modelo modernizador de industrialización “hacia adentro”.

La debilidad de régimen político en esta etapa se debe a la ausencia de autonomía y a la fusión de los componentes que lo integran. El modelo político se basó en un “Estado de compromiso” a través del cual se buscó un equilibrio (inestable) entre los distintos actores corporativos, sociales y políticos (Garretón, 2000: 30). Dicha inestabilidad se manifiesta en que entre las décadas de 1930 y 1970 en los distintos países latinoamericanos predominó un modelo de desarrollo “hacia adentro” con características similares mientras que los regímenes políticos encargados de llevarlo a cabo poseían características muy diferentes. Por ejemplo, mientras que en Argentina, Bolivia y Brasil se alternaron regímenes democráticos y militares, en Uruguay y Chile prevalecieron democracias estables, y México se caracterizó por un autoritarismo de partido hegemónico. Como sostiene Cavarozzi, esta “diversidad [de regímenes políticos] fue posible porque la mayoría de las decisiones estratégicas en materia de políticas económicas estuvieron relativamente aisladas de la <política>” (Cavarozzi, 1991: 95). Sin embargo, la incorporación de nuevos actores sociales que previamente se encontraban excluidos y la organización de la sociedad a través de sindicatos, organizaciones profesionales y públicas, cámaras empresariales, entre otras, generaron un ensanchamiento de la sociedad civil y, por ende, una multiplicación de las demandas y canales corporativos para expresarlas. Las demandas de la sociedad se diversificaron y, en muchos casos, se trataban de intereses contrapuestos que el Estado debía atender para continuar gozando de su apoyo. Por consiguiente, se genera una sobrecarga del sistema político cuyos orígenes se pueden explicar, por un lado, a partir del aumento de las funciones del gobierno bajo el Estado de Bienestar y del aumento de los canales de participación para expresarlas y, por el otro, la incapacidad del gobierno en

poder procesarlas y darles respuesta lo que termina generando una crisis en las capacidades gubernamentales.

Desde el punto de vista económico, la Matriz Nacional Popular también se basó en un equilibrio inestable que produjo su paulatino agotamiento. En este sentido, la intervención del Estado en la economía, promoviendo un modelo de desarrollo industrial sustitutivo de importaciones, control de cambios y medidas proteccionistas y orientando la producción hacia el mercado interno, si bien generó tasas de crecimiento relativamente altas durante las primeras décadas de su funcionamiento, a la larga la matriz produjo sucesivos cuellos de botella y severas dislocaciones (Cavarozzi, 1991: 95). De este modo, a partir de la década del sesenta hubo una profundización del déficit fiscal y el déficit en la balanza de pagos, aumento de la inflación, estancamiento de la producción agrícola, pérdidas de economías de escala, creación de monopolios en varias ramas industriales y un desincentivo para aumentar las exportaciones.

Los regímenes militares que surgieron en el Cono Sur entre las décadas del sesenta y setenta se propusieron dismantlar la matriz clásica a través de transformaciones en sus dos pilares más relevantes: la economía y la política. Si bien no consiguieron generar un nuevo modelo económico de desarrollo, con la excepción de Chile, lograron a través de los órganos represivos del gobierno, desmovilizar a la sociedad y terminar con el modelo de imbricación entre la sociedad civil y Estado.

Análisis de caso: Bolivia, desde la colonia a la conformación de una matriz nacional indígena.

1. La formación del Estado Nación y la construcción de ciudadanía

*“El progreso es el exterminio del indio o su doma ciudanzante”
(G. Linera, Narrativa colonial y narrativa comunal)*

La edificación del Estado Nación en Bolivia se hizo a partir de una negación de las múltiples naciones preexistentes. Al igual que en el resto de las colonias independizadas, tal construcción supuso la eliminación física de los indígenas, o bien, en aquellos países en que los indígenas eran numéricamente mayoritarios existía la creencia liberal-positivista de que esas etnias pre-sociales y bárbaras se extinguirían o serían asimiladas y civilizadas por la cultura criolla-mestiza. La teoría del liberalismo igualitarista, que sirvió de fundamento a la construcción de los Estados, asume en positivo una hipótesis del Estado-Nación que es en extremo problemática. Esto es, la coincidencia de las fronteras culturales y políticas, la imposibilidad teórica de que el *demos* pueda consistir en una pluralidad de *demosi*, y de la existencia de comunidades minoritarias que puedan sufrir eventualmente opresión o exclusión bajo la tutela estatal de la comunidad mayoritaria (Máiz, 2006: 70). A su vez, la noción de que el *ser nacional* puede ser impuesto por el Estado trajo aparejado la construcción de instituciones que no buscaron integrar al *otro* sino considerarlo como un factor exógeno al Estado a pesar de la territorialidad compartida.

De este modo, la ciudadanía, entendida como derechos jurídicos y responsabilidad política ejercida, será consagrada por la Constitución de 1826 sólo para quienes “posean una elevada renta, una profesión, sepan leer y escribir, y no se hallen en relación de servidumbre” (G. Linera, 2009: 176-177). Por consiguiente se establece una *ciudadanía de casta* en la cual el “(...) ciudadano es el sujeto que se constituye en tanto antípoda de la indianidad: propiedad privada contra propiedad común, cultura letrada contra cultura oral, soberanía individual contra soberanía colectiva (...)” (177-178). La ciudadanía en esta etapa de la república oligárquica se asemeja al patrimonio en el sentido de que posee un carácter hereditario, más que derechos colectivos se trata de un bien privado que, al igual que el Estado, se ejerce a través de la posesión patrimonialista del poder.

Sin embargo, la existencia de clivajes étnicos, lingüísticos, religiosos y socioeconómicos superpuestos y territorialmente diferenciados supone un problema a la perdurabilidad de los Estados que sólo puede ser superado a través de la existencia de un verdadero proyecto político integrador. No se trata sólo de reconocerlos como naciones dadas sino de la extensión de la ciudadanía efectiva que permita el reforzamiento identitario a través de la participación. Como sostiene Ramón Máiz “(...) nations are not to be considered as given entities susceptible only of recognition, but as ongoing processes of construction of collective identity and rights through participation, competition and deliberation” (Máiz, 2005: 59). Por consiguiente, cuando el Estado inventa al ciudadano y, a partir de la violencia física y simbólica, excluye a amplios sectores de la sociedad más temprano que tarde las colectividades reclamarán por una ciudadanía efectiva en la cual se sientan verdaderamente interpelados por el ámbito público (G. Linera, 2009: 174-175).

Las huellas que la herencia colonial iba a dejar como estigma en el indígena fueron luego reproducidas en tiempos de la república oligárquica y, a pesar de la extensión de la ciudadanía ocurrida a partir de la Revolución de 1952, continúan permaneciendo hasta nuestros días. Se trata, como señalara Zavaleta, de un *abigarramiento social* o *Estado aparente* en el cual existe una “superposición de diversos tipos de sociedad, que coexisten de manera desarticulada, estableciendo relaciones de dominación y distorsión de una sobre otras (...) [Es la coexistencia de] diferentes tiempos históricos, es decir, diferentes civilizaciones, en un mismo territorio y presente político y social” (Tapia, 2002: 10). Por consiguiente, el intento de edificar una nación a partir de distintos tipos de civilizaciones y de culturas acaba por generar un país multisectorial con un Estado monocultural y monosocietal (10). Hoy en día, numerosas poblaciones con modos de producir, sistemas de autoridad y valores comunitarios cohabitan una Bolivia capitalista que aún no han interiorizado, poseen otra temporalidad y concepción del mundo que la que el Estado tiene para ofrecerles (G. Linera, 2004: 433-434). Se trata en muchos aspectos de un Estado *esquizofrénico* que funciona a partir de un andamiaje institucional liberal y que no se corresponde *temporalmente* con la dinámica de gran parte de la sociedad. El hecho de que Bolivia sea uno de los países con mayores interrupciones militares, y haya sufrido numerosas insurrecciones indígenas, campesinas y obreras guarda estrecha relación con que amplios sectores sociales cuestionan la validez del Estado. Como señala García Linera, “la institucionalidad generalizada de los movimientos indígenas y plebeyos (...) cuestiona la validez de una institucionalidad republicana que aparenta modernidad en una sociedad que carece, e incluso está privada, de las bases estructurales y materiales de esa modernidad imaginada” (G. Linera, 2004: 435).

2. La Revolución de Abril de 1952 y la conformación de una Matriz Nacional Popular

En gran medida las condiciones para que se produjera una insurrección de carácter nacional popular a comienzos de los años cincuenta deben rastrearse en el período anterior de dominación oligárquica. La organización económica de la república se basó principalmente en una economía extractiva de recursos mineros, la plata y el estaño, y en la creación de grandes latifundios agrícolas. El funcionamiento del Estado patrimonialista era producto de los acuerdos de dominación oligárquica entre los hacendados y los propietarios mineros. Bajo esta matriz oligárquica se comienza a gestar la resistencia a través de la creación de un movimiento de sindicatos mineros revolucionarios y el fortalecimiento de una clase trabajadora industrial (Calderón, 2007: 43) que junto al extendido movimiento campesino fueron los actores claves del proceso insurreccional y la base social del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR).

A partir de la derrota militar del Estado oligárquico se inicia un período de transformaciones en la que se incorporan amplios sectores de la sociedad a través de la movilización más que de la representación. A su vez, se produce un cambio en el modelo de desarrollo y en la organización de los procesos económicos y se modifican las relaciones existentes entre el Estado y la sociedad.

En primer lugar, la revolución de 1952 puede ser entendida como la invención social de la nación (G. Linera, 1999: 181). Por primera vez en la historia de Bolivia los distintos sectores plebeyos actúan coordinados en un Movimiento Social Central autónomo arrogándose el derecho de participar en la gestión de lo político. Se trata de la intromisión de las organizaciones sindicales en los asuntos gubernamentales para, en conjunto, interpelar al Estado en la búsqueda de un cambio del orden social. El movimiento obrero, que tuvo como núcleo fundamental al proletariado minero, fue el actor central del proceso nacionalista y quién definió el principal conflicto de la sociedad en términos de clases. La fuerza de este núcleo, reflejada en todo el sistema organizativo de los sindicatos afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), hizo posible la estatización de la minería tradicional y, por lo tanto, el control estatal de los excedentes mineros (Calderón y Laserna, 1994: 56-57). Asimismo, los movimientos sociales campesinos se apropiaron no sólo del sindicato como organización social sino que para ellos la lucha de clases tenía un contenido real; por un lado el clivaje étnico se encontraba superpuesto al socioeconómico y, por otro lado, la producción comunitarista, como modo de producción pre-capitalista, precisaba de un reconocimiento jurídico y, a la vez, de una reforma agraria que expropiase a los grandes hacendados de la vieja oligarquía. De este modo, la Reforma Agraria de 1953 fue en gran medida “(...) una respuesta del gobierno a las fuertes presiones campesinas (...) que transformaron violentamente las relaciones de fuerza entre ciudad y campo (...) a partir de acumulación de un gran poder político y miliar” (Stefanoni, 2002: 9). Se trató de un gran aparato sindical que garantizó la presencia campesina en la arena política regional, la destrucción de la oligarquía terrateniente y la ocupación y distribución de las tierras de las haciendas (9).

En segundo lugar, el Estado se organizó de un modo corporativo siendo el sindicato el mediador entre la sociedad civil y el Estado. A pesar de que el MNR era el instrumento

partidario de la nueva elite política, ésta no podía ignorar a los sindicatos porque en ella residía la violencia armada legítima. Durante el período en que funcionó plenamente la matriz nacional popular (1953-1964), la acción del Estado se concentró, por un lado, en reconstruir el ejército y, por otro, en desarmar a los campesinos y obreros a fin de ejercer nuevamente el monopolio de la violencia. En este sentido, el MNR se basó principalmente en tres mecanismos para garantizar la fusión de los componentes de la sociedad. El primero de ellos se trató de la organización corporativa de las diferentes ramas de la economía y tenía por objetivo la modernización nacional y el desarrollo industrial a través de la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y la Corporación Boliviana de Fomento (CBF), entre otras. El segundo mecanismo se basó en el establecimiento de relaciones patrimonialistas entre el Estado y la sociedad a través del clientelismo burocrático. Dicho sistema de prebendas buscaba mantener de manera consentida el sistema de relaciones estamentales. Es decir, operaba *hacia arriba* como mecanismo de movilidad social para las capas medias y altas, y *hacia abajo* como mecanismo de control social transversal al conjunto de las organizaciones de la sociedad civil (Calderón y Laserna, 1994: 47). Finalmente, el tercer mecanismo se basó en un intento de homogenización cultural a través del cual se propendió a consolidar una identidad nacional a partir del fortalecimiento del Estado (G. Linera, 1999: 186). Se concebía a Bolivia como un país homogéneo, integrado y subordinado a la concepción occidental. De este modo, se impuso el castellano como lengua oficial y toda manifestación de pluralidad cultural emergente de la movilización y participación social fue vista como una amenaza a los objetivos de la unidad nacional (Calderón y Laserna, 1994: 46).

Por otra parte, se produce una extensión de la ciudadanía y se la reemplaza por lo que García Linera denomina *ciudadanía corporativa*. Es decir, el modo de ejercer la ciudadanía legítima pasa por ser miembro del sindicato. En esta etapa, la democracia se define *como intervención en los asuntos del Estado a través del sindicato*, con lo que los sujetos políticos legítimos se han de constituir a partir de ahora de manera corporativa” (G. Linera, 1999: 182, cursivas en la versión original). Por otra parte, la poca democratización política, social y cultural convierte al sindicato, y en particular a la Confederación Obrera Boliviana (COB), en el mediador privilegiado y en un instrumento más de control y homogenización social (185-186).

Es de este modo que se erige un Estado patrimonialista corporativo que funcionará como agente de desarrollo y acabará sometiendo a los obreros, campesinos, élites regionales, grupos profesionales, partidos políticos y agencias internacionales de cooperación a su lógica clientelar y de control social. Sin embargo, la revolución no fue capaz de generar un andamiaje institucional capaz de resolver los problemas de la fragmentación sociopolítica y la necesidad de una modernización racionalizadora del orden socioeconómico. El sistema de representación fue el componente más débil de la matriz nacional popular y produjo el desarrollo del inestable *Estado de compromiso*. La imposibilidad de institucionalizar la revolución, producto de la fusión e interpenetración entre el Estado y la sociedad civil, acabará ocasionando un círculo vicioso entre ingobernabilidad política, quiebres democráticos e inestabilidad económica (Calderón y Laserna, 1994: 47).

3. La desarticulación de la Matriz Nacional popular a través de los regímenes militares

“(...) ninguna situación concreta es más compleja que los largos momentos de transición cuando las limitaciones más sencillas se vienen abajo”
(Wallerstein, *Sociología de la comunidad religiosa*)

Los doce años de gobierno nacional corporativo (1952-1964) se caracterizaron por intentar mantener un equilibrio inestable entre las demandas de los distintos movimientos sociales y corporativos y los conflictos entre las dos principales facciones del MNR: el ala derecha que operaba desde la prefectura de Cochabamba –con apoyo de la Iglesia católica y el ejército– y el ala izquierda simbolizada en el Ministerio de Asuntos Campesinos y que contaba con el apoyo de la Central Obrera Boliviana. En este sentido, ambos grupos se disputaron el control del poderoso movimiento sindical campesino en un contexto en que los militares comenzaban a “alertar” acerca de la infiltración comunista en áreas rurales (Stefanoni, 2002: 9-10).

La acelerada polarización política alcanzó el seno del MNR y produjo la división del movimiento campesino en dos bandos enfrentados en forma de milicias armadas, lo que se denominó la *Guerra Chamba*. A esta altura el objetivo del presidente Siles (1960-1964) era terminar con las disputas campesinas y lograr su subordinación pasiva. Es en este marco en el que los militares se involucran en la política. La vieja alianza entre los movimientos obreros y los campesinos en un Movimiento Social Central se había terminado, y con ello también la capacidad de los obreros de poder replantear su relación con el Estado. Paulatinamente el ejército se va convirtiendo en la “institución tutelar de la patria” (Soto, 1994: 3) y el campesinado armado en su principal aliado. La exitosa intervención de las fuerzas militares del General Barrientos en la *Guerra Chamba* le valió el mote de “pacificador de la patria” y le permitió, a su vez, crear una vasta red clientelar de centrales y federaciones campesinas adpta. El *Pacto Militar Campesino* es la culminación de la cooptación que realizan los militares del campesinado, que incluso es utilizado como cuerpo paramilitar (o policía militar campesina) para reprimir al movimiento obrero, y en particular a los sectores mineros, en nombre de la paz y la seguridad interior (7-8). El cerco se había cerrado sobre Paz Estensoro, futuro presidente designado, y el 4 de noviembre de 1964, con el apoyo del campesinado de Cochabamba y amplios sectores medios, René Barrientos realiza el golpe de Estado restaurador que lo depositará en la presidencia de la “república”.

Como sostiene Stefanoni, el Pacto Militar Campesino y la injerencia directa del Ejército en las estructuras sindicales sustituyen la articulación sindicato-partido-Estado propia de la Matriz Nacional Popular, por una nueva estructura de enlace entre el sindicalismo paraestatal y el Ejército que perdurará hasta finales de la década del sesenta (Stefanoni, 2002: 10). La dictadura barrentista se caracterizó, en base a un discurso anticomunista, por una feroz represión al movimiento obrero y popular organizado al que se lo identificaba como el enemigo interno a derrotar. Asimismo, el modelo de desarrollo económico “hacia adentro”, la integración social, la autonomía nacional o la unión del campo popular que formaban parte del proyecto nacionalista fue reemplazado por una doctrina que buscó

desmovilizar a los sectores sindicales que no podían ser cooptados e implicó, a través de reformas en la propiedad de los sectores industriales, una desnacionalización de la economía (Soto, 1994: 25). Por otra parte, la dictadura de Barrientos inicia una etapa que estará signada por múltiples golpes de Estado de diversas orientaciones ideológicas. Entre los que intentaron recomponer el legado de la Revolución de 1952 se destacan los gobiernos de Ovando y Torres que propiciaron un acercamiento a los sectores obreros y mineros, reivindicando el carácter nacional y antiimperialista de la Revolución. Sin embargo, no encontraron una base social que permitiera recomponer la matriz desarticulada. Por un lado, el campesinado del valle seguía fiel a los términos del pacto y a la ideología barrentista y, por otro, los sectores obreros ya no estaban en condiciones de imponer su hegemonía al resto de los movimientos sociales con excepción de ciertos sectores de la pequeña burguesía y los partidos de izquierda.

El golpe de Estado del General Banzer fue apoyado por un frente cívico compuesto por el MNR y se trató de una “máscara civil” que de alguna manera legitimaba el golpe. Su gobierno se caracterizó por una feroz represión para evitar el avance de las masas y por la implementación de paquetes económicos neoliberales. Los ajustes y aumentos impositivos encontraron resistencia en los sectores campesinos que aún reivindicaban su alianza con los militares y la vigencia del pacto. Sin embargo, éstos fueron duramente reprimidos en lo que se conoce como la “Masacre del Valle” ocurrida en 1974. De este modo, la masacre revela, por un lado, que los militares al romper el pacto unilateralmente ya no necesitaban contar con apoyos sociales para implementar su proyecto político, y por otro lado, la vigencia de una mentalidad colonial oligárquica basada en el desprecio y racismo hacia los sectores subalternos. Es decir, ya no se apela a la negociación o a la disuasión sino que se recurre al exterminio (Soto, 1994: 31). El fin del Pacto Militar Campesino y la total ruptura del régimen militar banzerista con los preceptos de la revolución permitirán que por primera vez el campesinado pueda iniciar un recorrido de toma de conciencia y ejercitar modalidades de autorrepresentación basadas en la autonomía con el Estado.

4. Transición a la democracia: el resurgir de los movimientos identitarios

Durante el régimen militar de Banzer se hará evidente el fracaso de la política de ciudadanización que intentó imponer la Revolución del 52'. A partir de la década del setenta comenzarán a surgir nuevas identidades al interior del movimiento campesino-indígena, especialmente en el Altiplano, producto de la desestabilización de las viejas identidades subordinadas al Estado nacionalista y transformadas paulatinamente por los militares en fuerzas de choque contra los obreros mineros (Stefanoni, 2002: 10).

La total subordinación de buena parte del campesinado a los regímenes autoritarios generó paulatinamente que diversos grupos del campesinado comenzaran a diferenciarse invocando identidades adscriptivas que permitieran la constitución de movimientos de base autónomos. En este sentido, las dos categorías centrales que definen las identidades y prácticas políticas son el *campesino e indio*. Sin embargo, ambos conceptos son ambiguos y pueden ser utilizados para establecer distintas alianzas políticas y crear diferencias culturales. Como señala Stefanoni, mientras que el concepto *campesino* es una categoría inclusiva que esconde las diferencias de clase, *indio* es una categoría excluyente que

distingue a los vecinos de los campesinos y que está basada en nociones culturales de raza e imágenes dominantes que asocia el campo y su gente con la *indianidad*. De este modo, “las relaciones contingentes entre categorías étnicas [o aspectos sociales u ocupacionales] (...) implican que los individuos podían “pasar” en ocasiones de una categoría a otra (...)” (Stefanoni, 2002, 11). Es en este contexto que comienzan a surgir movimientos indígenas como el Partido Indio de Fauso Reinaga o el Movimiento Túpac Katari que denuncian el Pacto Militar Campesino y se basan en una afirmación identitaria adscriptiva en contraposición a la posición en la estructura social que continúa definiendo al resto de los movimientos. El discurso indigenista se basa en denunciar “la continuidad de una situación colonial que se impuso sobre una sociedad originariamente libre y autónoma (...) [y] la idea del “despertar del gigante dormido”, en alusión a la mayoría étnica nacional, que hace valer su condición numérica frente a la oposición criolla” (12). Estos movimientos indígenas constituyen el antecedente histórico sobre el cual se edificarán los movimientos sociales identitarios a partir de la explosión de las identidades adscriptivas en la década del noventa.

Por otra parte, a partir de la caída de Banzer en 1978 y un agravamiento de la crisis política (se suceden cuatro golpes de Estado en dos años) se genera un Movimiento Democrático que actúa en el seno de la COB y que logra capitalizar los sentimientos antimilitares concebidos a partir de la represión banzerista. Se trata de una nueva articulación obrero-campesina, un movimiento de masas, que posee autonomía ideológica y organizativa y en el que el movimiento katarista es el actor central. Su accionar se caracteriza por intentar debilitar al régimen y todas sus demandas se subsumen a que éste finalice. De este modo, el proceso de transición hacia la democracia que se inicia en 1982 se debe, por un lado, a la incapacidad de la dictadura de generar un régimen político estable y de carácter autoritario que fuera legitimado, y por otro lado, por los procesos de movilización social y política que acabaron forzando la apertura “desde arriba” (Garretón, 1997: 7-8). A su vez, como sostiene Garretón la transición democrática en Bolivia también tiene un carácter de *fundación democrática*, “(...) en cuanto término de un ciclo histórico de fórmulas políticas híbridas o de recurrencias autoritarias y democráticas, o de cambios permanentes de régimen” (3).

La primera experiencia democrática luego de la transición hacía presagiar de las dificultades por las que debería atravesar la democracia boliviana para poder consolidarse. La desarticulación del proceso modernizador nacionalista llevado a cabo por la dictadura militar no implicó su reemplazo con un nuevo proyecto modernizador que configure otros tipos de correspondencia entre política, economía, cultura y sociedad. Con ese lastre debieron edificarse las nuevas democracias e intentar su consolidación. A su vez, el gobierno de Siles Suazo se inicia en un contexto de crisis internacional, el peso de una deuda externa que conllevaría a la cesación de pagos de casi toda la región produciendo la “crisis de la deuda”, y el legado dejado por los regímenes militares que implicaría para el gobierno progresista la implementación de un programa de ajuste y estabilización económica que erosionaría las bases de su apoyo electoral.

5. La democracia pactada y la construcción de una matriz neoliberal

A partir de la crisis institucional que derivó en la renuncia de Siles Suazo se inicia un período denominado de “democracia pactada” y que se caracteriza por una serie de acuerdos interpartidarios (MNR, MIR y ADN) con el objetivo de garantizar la gobernabilidad. Con el retorno de la democracia el sistema partidario se encuentra desestructurado de modo tal que ningún partido político puede conseguir la mayoría absoluta necesaria para ganar la presidencia. De este modo, es el congreso el que determinará, a través de acuerdos informales, cuál de los candidatos gobernará al país en base a un criterio de alternancia partidaria en el poder. La “democracia pactada” funcionó desde 1985 hasta 2003 formando cinco gobiernos de coalición que de algún modo garantizaron la estabilidad del régimen político y la autonomía de los componentes, a costa de volverse cada vez más deslegitimado y menos representativo.

Las reformas neoliberales aplicadas por la “democracia pactada” produjeron profundos cambios en las formas organizativas a través de las cuales la sociedad civil adquirió legítimamente presencia pública. Si bien el modelo de desarrollo “hacia adentro” estaba agotado y fueron necesarias políticas de ajuste y estabilización económica para controlar los déficit comerciales y en la balanza de pagos, las medidas económicas adoptadas se vinculan con una “transición liberal” entre la modernidad político céntrica hacia una de tipo mercado céntrica en la cual se privilegia la autonomía del mercado (Touraine, 1998: 30-31). En este sentido, los cambios operados en la estructura económica conllevan transformaciones en la acción social y el debilitamiento y fragmentación de los actores emergentes de la Revolución Nacional.

En primer lugar, la caída del estaño como principal fuente de divisas debido a su agotamiento y la pérdida de productividad en las minas hizo que este sector fuera abandonado tanto por el Estado como por las empresas privadas, trayendo aparejado la disminución del poder de presión de los sindicatos mineros.

En segundo lugar, las políticas de ajuste, privatización de empresas públicas, la flexibilización laboral y el cierre de grandes industrias fabriles promovió el debilitamiento y la fragmentación de los sectores urbanos. Tanto las clases bajas como las medias comienzan a desarrollar comportamientos más individualistas en una suerte de desilusión de la solidaridad de clase (Calderón y Laserna, 1994: 18). Paralelamente, hay un reflujo defensivo del sindicalismo fabril de tradición revolucionaria en la cual las demandas y conflictos tienen a volverse más radicales cuanto menor capacidad de presión poseen sobre las instituciones estatales.

En tercer lugar, la apertura económica fue particularmente dramática para los productores campesinos de las comunidades más tradicionales que se caracterizan por una producción a baja escala y que no es competitiva en el mercado debido a que la calidad y variedad de sus productos satisface cada vez menos a los sectores urbanos influidos por la estandarización de los gustos que impone la globalización (15). A pesar de que el movimiento campesino se fracturó en distintas corrientes y perdió capacidad de incidir sobre el Estado, surgieron nuevos movimientos que reclaman la autodeterminación de las naciones indígenas y reivindican la condición pluri-multicultural de Bolivia.

6. Los nuevos movimientos identitarios

Los nuevos movimientos sociales que surgen a fines de la década del ochenta y principios del noventa se diferencian de los que predominaban bajo la matriz clásica en que ya no se autorreferencian a partir de los ejes trabajo y política. Los movimientos campesinos y obreros que se articularon en torno al Estado Revolucionario se constituían a partir de un tipo societal de referencia que era la sociedad industrial de Estado Nacional. En este sentido, los actores–sujetos se autodefinían de acuerdo a su situación ocupacional: obreros, mineros, artesanos, campesinos; y/o en referencia al Estado Nación como nacionalistas, comunistas, anarquistas, etc. El impacto de los procesos de globalización económica, política y cultural produce un cambio a nivel estructural generando sociedades posindustriales globalizadas. Este nuevo tipo societal organiza a las sociedades principalmente a partir del consumo y la información, es decir, lo social y lo cultural (Garretón, 2000b: 36). De este modo, las identidades que tienden a constituir al actor-sujeto son de tipo adscriptivas: sexo, religión, etnia, nacionalidad, región, edad, etc. Sin embargo, esto no implica que las identidades adquisitivas ya no incidan en la acción colectiva. Por el contrario, “estamos en presencia de sincretismos particularistas y universalmente globalizados, de elementos adscriptivos y adquisitivos, tradicionales y modernos, de predomios capitalista pero con fuertes hibridaciones socialistas (37).

6.1 El movimiento sindical cocalero

*“Como indios nos explotaron, como indios nos liberaremos”
(Albó, Xavier, Pueblos indios en la política)*

El movimiento cocalero que irrumpe en la escena política a mediados de los ochentas consiguió convertirse rápidamente en uno de los más combativos, revitalizando al movimiento sindical campesino, y finalmente convirtiéndose en el actor central del MAS-IPSP. Sus orígenes están determinados por oleadas migratorias de “colonizadores” hacia la región del Chapare durante la crisis económica de comienzos de los años setentas y por la política de “relocalización” de los mineros desempleados. En este sentido, la mayoría de los campesinos se volcaron a la producción de la hoja de coca y su acelerada politización se inscribe en el marco de la “guerra contra las drogas” iniciada por el gobierno de Paz Estensoro con el apoyo del gobierno estadounidense. La resistencia emprendida por el movimiento cocalero a la erradicación forzosa del cultivo a través de un variado repertorio de protesta (huelgas de hambre, bloqueos de camino, largas marchas de protesta, enfrentamiento con policías y militares erradicadores) significaron una poderosa demostración de fuerza y movilización que desafiaron el principio de autoridad y soberanía estatal. Asimismo, fueron muy eficaces en la utilización de los medios de comunicación para hacer visible el conflicto, denunciar la militarización que existía en la región de El Chapare y la injerencia del gobierno de EE.UU. a través de la DEA y, a su vez, asociar a los gobiernos bolivianos y estadounidenses con el narcotráfico y la cocaína (Stefanoni, 2002: 19-20). Por otra parte, la defensa del cultivo no careció de fuertes reivindicaciones de carácter simbólico al resignificar el cultivo como una “hoja milenaria heredada de nuestros antepasado” y convertir a la defensa del cultivo en la bandera de todos los movimientos sociales oprimidos del país.

De este modo, la retórica utilizada por el sindicato de campesinos cocaleros combinó lo tradicional con lo moderno, la defensa de un modo de vida propio de las etnias andinas con el nacionalismo revolucionario que defiende la soberanía y un recurso estratégico de Bolivia como antes fue la plata y el estaño. El apoyo social al movimiento no provino sólo de las regiones rurales sino también de las urbanas. En este sentido, “(...) las ciudades bolivianas son también ciudades de campesinos, y por eso los temas campesinos tienen presencia en el imaginario urbano (...)” (Calderón, 2007: 37) El éxito de su discurso fue resignificar los “ (...) intereses sindicales económicos-corporativos de los cultivadores de coca, a articular parcialmente una voluntad nacional-popular que interpela al modelo económico e institucional vigente en el país” (Stefanoni, 2002: 21).

7. El MAS-IPSP y el ascenso de Evo Morales al poder

El MAS se caracteriza por poseer atributos bastantes atípicos para lo que son los partidos políticos modernos. Por un lado, se trata de una organización política que funciona dentro de la estructura político partidaria como mediador entre el Estado y la sociedad civil. En este plano es una maquinaria electoral que entre sus objetivos se destacan promover candidatos y conseguir votos para acceder a cargos y bancas. Pero por otro lado, también puede definirse como una confederación de movimientos sociales campesinos e indígenas que aglutina a diversos intereses corporativos y que también tiene por función organizar la acción colectiva en torno a las demandas de los movimientos que lo integran. A diferencia del PJ argentino o el PT brasilero, que también se encuentran fuertemente ligados al movimiento sindical, el MAS no posee una estructura organizativa diferenciada entre lo que es el partido político y el movimiento socio-sindical. García Linera define al MAS como una coalición flexible y negociada de movimientos sociales. Se trata, según él, del gobierno de los movimientos sociales en la que no hay una estructura partidaria (G. Linera, 2007: 166). A su vez, la superioridad del sindicato sobre el partido tiene como antecedente el funcionamiento del movimiento obrero minero bajo el Estado Nacionalista y ha marcado la lógica organizativa del movimiento campesino (Stefanoni, 2002: 23).

El problema del bajo nivel de institucionalización partidaria es que genera que el movimiento se vuelva muy dependiente de la figura de su líder. Por otra parte, resulta dudoso de qué modo actuaría el MAS si tuviera que desempeñar, luego de encontrarse en una posición hegemónica, el rol de la oposición. Su estructura organizativa responde a una “coalición inestable” que se encuentra conformada por movimientos sociales cuyo apoyo es orgánico y permanente y otros que son circunstanciales aliados del partido de gobierno (Mayorga, 2008: 32).

En cuanto a sus aspectos ideológicos, el MAS-IPSP y el movimiento cocalero como actor central evitaron asumir posiciones radicales tales como la demanda de autogobierno indígena que plantean otros movimientos. De este modo, buscó articular a diversos sectores sociales en un proyecto emancipatorio común y generar, como extensión de los movimientos sociales, la creación de un Instrumento Político (23-24). Su discurso combina elementos nacionalistas, socialistas, étnicos y campesinos. Se trata de un partido-movimiento híbrido en el cual se hacen presentes elementos propios de los partidos nacional populares junto con otros de tipo comunitarios.

El ascenso electoral del MAS se debe principalmente a cuatro aspectos. En primer lugar, la crisis de legitimidad por la que atraviesan los partidos tradicionales. Los efectos negativos producidos por las reformas neoliberales, y que fueron sostenidas invariablemente por todos los partidos en el marco de la “democracia pactada”, profundizaron la visión de la política ejercida por élites partidarias que a través de acuerdos permanecen en el poder. En segundo lugar, la constante movilización del MAS patrocinando causas nacionales tales como la defensa del cultivo de coca, la nacionalización de las empresas de servicios públicos, el reconocimiento de las autonomías tanto regionales como indígenas, entre otras, le significaron convertirse rápidamente en una fuerza política nacional. En tercer lugar, la reforma del sistema electoral llevada a cabo por Sánchez de Lozada permitió, al incorporar distritos uninominales para la elecciones de legisladores, la construcción de un bloque parlamentario cuando aún se trataba de una fuerza minoritaria. Por último, la adopción de posiciones moderadas en los momentos de crisis políticas, como fue la “Guerra del Gas” que desembocó en la renuncia anticipada de Sánchez de Lozada, permitieron que el MAS se constituya para los sectores medios urbanos en una verdadera opción de gobierno.

8. Conclusiones

Si bien la llegada de Evo Morales a la presidencia fue sorpresiva, más aún fue la rapidez con la que consiguió que su partido se convirtiera en hegemónico. Detrás de su liderazgo consiguió cohesionar a diversos movimientos sociales y a amplios sectores que permiten garantizarle una mayoría absoluta en las elecciones. Sin embargo, esto conlleva riesgos para la estabilidad democrática. Por un lado, una oposición atomizada y sin chances reales de ganar una elección puede traer aparejado, como quedó en evidencia con el conflicto de los estatutos autonómicos, una radicalización de las posiciones de los sectores opositores. Por otro lado, los más fervientes opositores a su proyecto son los prefectos que forman parte de la “medialuna oriental” (los departamentos de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz). De este modo, el riesgo es que se acentúen los conflictos regionales entre oriente y occidente y que cada vez sea más difícil mantener la unidad nacional.

Por otra parte, Evo Morales ha sido prudente en cuanto a la implementación de su proyecto de modernización que contrasta con su retórica radical. La redefinición del clivaje Estado – mercado se puso de manifiesto con la nacionalización de los hidrocarburos, que en lugar de ser confiscados se renegociaron los contratos de modo tal de establecer mejoras tributarias para el Estado Nacional (Mayorga, 2008: 24). Asimismo, la reforma constitucional generó la oposición de los prefectos de la “medialuna” aunque la mayoría de los partidos opositores con representación en la Convencional Constituyente se manifestaron abiertos a negociar y en gran medida la nueva constitución fue fruto del consenso y el apoyo popular. Las posturas de máxima del MAS de fundar un Estado Multi-Nacional y garantizar un porcentaje de escaños del congreso para los candidatos indígenas fueron moderadas de modo tal de que se pueda aprobar la constitución y conseguir el reconocimiento de Estado Pluricultural, los mecanismos de democracia semi-directa y que las autonomías departamentales se voten conjuntamente con las indígenas.

La oposición regional que enfrenta al gobierno de Evo Morales impugna el régimen más por las cuestiones simbólicas que por las políticas públicas. Le cuestionan su

acercamiento a Chávez, su retórica radical “socialista” y, sobretudo, le cuestionan haber construido un movimiento campesino indígena que gobierna sabiéndose numéricamente superiores y que, a través de las reglas de la democracia, difícilmente pueda ser derrotado. Sin embargo, tal infalibilidad del MAS en las elecciones se pondrá en duda en el 2013 cuando deba abandonar el cargo y nada garantiza que otro liderazgo pueda mantener la cohesión del movimiento.

Por otra parte, todo proceso de descentralización política en regímenes unitarios y divididos por clivajes étnicos, culturales y socioeconómicos conlleva riesgos. El proceso de descentralización que bien puede generar una mejora en la calidad democrática y en la participación social también puede producir un movimiento antagónico, en el sentido de que se produzcan mayores demandas de autonomías bajo la amenaza de secesión. En un país con una brecha de desigualdad tan pronunciada como Bolivia y con los recursos concentrados geográficamente, el tránsito al federalismo puede significar la cristalización de las desigualdades e incluso un aumento de las diferencias por ejemplo en la calidad de las prestaciones de los servicios públicos (salud, educación, transporte, etc.) entre las regiones más ricas y las más pobres. El federalismo puede ser ventajoso desde el punto de vista del autogobierno pero, a su vez, puede ser contraproducente para los procesos de cambio estructurales ya que el Estado Nacional contará con menos herramientas para transferir recursos de una región a otra.

9. Bibliografía

- Calderón, Fernando (2007), “Oportunidad histórica: cambio político y nuevo orden sociocultural”, en Nueva Sociedad, núm. 209.
- Calderón, F. y Laserna, R. (1994), “Paradojas de la modernidad”, Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, Cochabamba, p.41.
- Cavarozzi, Marcelo (1991), “Más allá de las transiciones a la democracia en América Latina”, en Revista de Estudios Políticos, Nueva Época, núm. 74.
- García Linera, A. (2007), “Las reformas pactadas. Entrevista a Álvaro García Linera por José Natanson”, en Nueva Sociedad, núm. 209.
- García Linera, Álvaro (2004), “Crisis del Estado y sublevaciones indígena-plebeyas en Bolivia”, en Álvaro García Linera, Luis Tapia y Raúl Prada, Memorias de octubre, La Paz, Comuna y Muela del Diablo.
- García Linera, A. (1999), “Ciudadanía y democracia en Bolivia (1900-1998)”, en Revista Ciencia Política, año IV, núm. 4.
- García Linera, A. (1998), “Narrativa colonial y narrativa comunal”, en Memoria de la XI Reunión Anual de Etnología, La Paz, Museo Nacional de Etnografía y Folklore.
- Garretón, Manuel Antonio (2002), “La transformación de la acción colectiva en América Latina”, Revista de la CEPAL núm. 76.
- Garretón M.A (2000a), “Política y Sociedad entre dos épocas. América Latina en el cambio de siglo”, Ed. Homo Sapiens, Rosario, Argentina.
- Garretón, Manuel Antonio (2000b), La sociedad en que vivi(re)mos: introducción sociológica al cambio de siglo, Ediciones Lom.
- Garretón, Manuel Antonio (1999), “Las sociedades latinoamericanas y las perspectivas de un espacio cultural”, en Manuel Antonio Garretón (coord.) América Latina: Un espacio cultural en el mundo globalizado. Debates y perspectivas, Bogotá D.C., Tercer Mundo Editores.
- Garretón, Manuel Antonio (1997), “Revisando las transiciones democráticas en América Latina”, en Nueva Sociedad núm. 148, pp. 20-29.
- Garretón, Manuel Antonio y Espinoza, Malva (1992), “¿Reforma del Estado o cambio en la matriz socio-política? El caso chileno”, en Perfiles latinoamericanos: revista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México, ISSN 0188-7653, N° 1, (Ejemplar dedicado a: reforma del Estado), págs. 133-170.

- Garretón, Manuel Antonio (1991), “Política, cultura y sociedad en la transición democrática”, en Nueva Sociedad núm. 114.
- Laclau, Ernesto (1986), “Hacia una teoría del Populismo”, en Política e Ideología en la Teoría Marxista, Siglo XXI, Madrid.
- Máiz, Ramón (2005) “Nation and deliberation”. En VII Congreso Español de Ciencia política y de la Administración: Democracia y Bueno Gobierno.
- Mayorga, Fernando (2008), “El gobierno de Evo Morales: cambio político y transición estatal en Bolivia”, Tendencias políticas actuales en los países andinos, Center for Integrated Area Studies, Kyoto University, pp. 21-39.
- Ozslak, Oscar (1982), “Reflexiones sobre la formación del Estado y la construcción de la sociedad argentina”, en Desarrollo Económico, núm 84, vol. 21, IDES, Bs.As, pp. 531-584.
- Soto, César (1994), “Historia del pacto militar campesino”, en Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, Cochabamba, p.43.
- Stefanoni, Pablo (2002), “El nacionalismo indígena como identidad política: La emergencia del MAS-IPSP (1995-2003). En Informe final del concurso: Movimientos sociales y nuevos conflictos en América Latina y el Caribe. Programa regional de Becas CLACSO. <<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/2002/mov/stefanoni.pdf>>
- Tapia Luis, “La condición multisocietal. Multiculturalidad, pluralismo y modernidad”, Muela del Diablo Editores, La Paz, 2002.
- Touraine, Alain (1999), “Globalización, fragmentación y transformaciones culturales en el mundo actual”, en Manuel Antonio Garretón (coord.) América Latina: Un espacio cultural en el mundo globalizado. Debates y perspectivas, Bogotá D.C., Tercer Mundo Editores.
- Weber, Max (1981) Economía y sociedad, México, Fondo de cultura económica.